



# Proceso

informativo semanal

Año 25, No 1130

Enero 26, 2005

ISSN 0259-9864

*"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte"* Ignacio Ellacuría

## Editorial

2

*El FMLN pierde terreno*

## Política

4

*¿Crisis en el FMLN o crisis del sistema?*

## Economía

6

*Deuda externa: el eterno problema económico*

## Sociedad

9

*Relanzando el Plan de Nación*

## Internacional

11

*Tragedia en el Océano Índico*

## Reporte IDHUCA

13

*Los derechos humanos en el 2004 (IV)*

## El FMLN pierde terreno

*Las nuevas deserciones en las filas de diputados del FMLN no es ninguna sorpresa, puesto que se veían venir. Es curioso, por eso, que los más sorprendidos sean los diputados de ARENA, porque ellos provocaron estas nuevas defecciones. El paquete estaba arreglado con anticipación. En la plenaria legislativa de la semana pasada, a última hora, modificaron la agenda del día para introducir el dictamen de la comisión de hacienda, que recomendaba aprobar la cobertura del déficit del presupuesto nacional de este año con bonos. Luego votaron con el resultado conocido de antemano y, enseguida, cerraron la sesión plenaria. Parte del arreglo era la prensa la cual, aun cuando la votación tuvo lugar entrada la noche, colocó la noticia en primera página y, a primera hora de la mañana siguiente, los voceros gubernamentales estaban disponibles para los medios, donde mostraron su falsa sorpresa y se congratularon de lo que habían logrado.*

*El arreglo pasa por reformas a la legislación electoral, que permiten a los partidos pequeños de la derecha permanecer en el registro oficial, aun cuando no consiguieron el mínimo establecido por la ley, en la última elección. Más aún, las reformas tienen efecto retroactivo, un hecho inaudito en legislación electoral, pues así como permiten la permanencia de estos partidos, también podrían, dado el caso, deslegitimar una elección popular, que no fuera de su conveniencia. Esta reforma era necesaria para contar con los votos de los disidentes demócrata cristianos, quienes, junto con los dos diputados del FMLN, hicieron la mayoría cualificada. Esto significaba que la aprobación del presupuesto de este año se reducía a un simple trámite, puesto que sólo se necesita mayoría simple.*

*Como no podía ser menos, el presidente Saca y los voceros de ARENA se deshacen en elogios para los dos diputados del FMLN, que votaron a favor. Los consideran valientes y patrióticos. Estos, por su lado, justifican su deserción alegando su preocupación por los niños hospitalizados, la necesidad del presupuesto y el carácter revolucionario y heroico de su decisión. Valor sí tienen, pero lo demás es demagogia. Tienen valor, porque aceptaron desmarcarse de la línea oficial de su partido y eso significa la expulsión inmediata. Pero más amor le tienen al dinero y a las prebendas, que a los niños y a los enfermos, porque lo más probable es que no hayan podido resistir la oferta de ARENA, partido que, sin duda, les dio una buena cantidad de dinero y les ha prometido cargos gubernamentales que les aseguren un futuro inmediato. Como es natural, todos niegan enfáticamente, pero sin convicción, que haya habido dinero de por medio. Alegar que el voto en contra del FMLN es un acto de rebeldía contra su dirigencia es inconsistente, porque hay muchas otras formas de expresar el rechazo a la dirección del partido.*

*Los hechos de esta plenaria van más allá de la mera aprobación del presupuesto. La deserción significa también que el FMLN ha perdido mucho terreno, en la Asamblea Legislativa. Con esta deserción, no sólo se derrumba la fuerza de sus demandas actuales al gobierno de ARENA, sino que también las que pueda hacer en el futuro. Es cierto que todavía tiene un voto de ventaja, puesto que uno de los desertores es diputado suplente, pero es evidente que, en caso de necesidad, ARENA tiene poder para comprar ese voto crucial.*

*La sorpresa causada por la votación en ARENA es falsa, pero en el FMLN es real. Este partido está tan conmocionado que su primera reacción consistió en lanzar acusaciones y epítetos. Acusar a los desertores de traición y buscar similitudes con la pasión de Cristo, no son más que desahogos de impotencia y perplejidad. Hace apenas unos pocos días, el FMLN pensaba que todavía podía exigirle al presidente Saca sentarse a negociar con él. Ante la debacle que padece, el FMLN acusa a terceros. En concreto, al gobierno de Saca y a ARENA, los cuales, es indudable, son responsables de lo ocurrido. Culpar a otros es fácil, pero no suficiente, pues el FMLN también debe mirar un poco hacia su interior. Es cierto que no puede destacar vigilantes para cada diputado, alcalde o dirigente del partido; pero algo funciona mal en éste, puesto que uno de los diputados que se vendió era un militante intachable para los parámetros del partido. Más allá de ello, la dirigencia del FMLN debe cuestionarse sobre la forma en que dirige el partido. Cada vez es más evidente que su autoritarismo no puede imponer la disciplina interna, ni mantener la unidad. Los desertores no son sólo simples afiliados, sino militantes. Si éstos han caído, ¿qué se puede esperar de los simples afiliados?*

*La convicción y los principios son el baluarte más eficaz contra el soborno; al menos, habría más resistencia ante las embestidas del adversario. Pero eso es, precisamente, de lo que adolecen, por lo general, los políticos del FMLN y también los de los otros partidos. Es contradictorio exigir moralidad y fidelidad a los principios, cuando se trata de votar contra ARENA, en la Asamblea Legislativa, y no exigirlos en otras circunstancias, por ejemplo, en las elecciones internas del FMLN, en la elaboración de sus políticas, o al votar a favor del transporte público, a raíz de arreglos con la derecha, pero en detrimento del usuario. La fidelidad a los principios y la moralidad no se suplen con autoritarismos. Obcecado por el poder legislativo que representaba, cegado por su ideología y preso de su voluntarismo, el FMLN forzó al extremo la situación política y perdió el control sobre ella. Su poder de veto depende ahora de un solo voto, el cual, en vista de lo ocurrido, no es sólido.*

*Otra tentación que acecha al FMLN es abandonar el sistema democrático y sus reglas institucionales para lanzar a sus militantes a las calles y protagonizar alborotos con el fin de desestabilizar al país y arrinconar al gobierno de Saca. Es difícil que pueda conseguirlo, aunque sí tiene capacidad como para entorpecer la vida nacional. Pero estas acciones de calle no le van a granjear el favor de los electores que no votan por él y que tampoco son asiduos votantes de los otros partidos. Y, suponiendo que lo consiguiera, es poco lo que pudiera sacar de la inestabilidad. La experiencia ya ha demostrado que, por este camino, no se alcanzan los fines que dice perseguir. El desafío consiste en luchar para dignificar la actividad política partidista. El FMLN, ni ningún otro partido político, puede exigir integridad a sus militantes, si sus dirigentes no son ejemplo incuestionable de ella. Y ya se sabe que, sobre la integridad y honestidad de los partidos políticos, hay mucha tela que cortar. La institucionalidad del país debe ser rescatada. Además, el FMLN no debe olvidarse de la gente. Optar por el alboroto callejero enfervoriza a los convencidos, pero al mismo tiempo, aleja aún más al partido del resto del cuerpo electoral, de aquel del cual deben salir los votos para llegar al poder del Estado democráticamente.*

## ¿Crisis en el FMLN o crisis del sistema?

Decir que el FMLN es una organización que se encuentra en crisis no constituye ninguna novedad. Pero afirmar que en la situación caótica por la que pasa el partido de izquierda se refleja un problema más hondo, que afecta al sistema político en su conjunto, merece analizarse de manera pausada. Los recientes sucesos en torno a la aprobación de los préstamos internacionales para financiar el Presupuesto del Estado no son sólo un síntoma de la ineficacia que reina en el partido de izquierda, como algunos quieren hacer creer. También cuestiona a la derecha y a sus jugarretas para hacerse con el control político. En suma, no sólo el FMLN es el afectado (y el cuestionado), sino también el sistema político en su conjunto.

### ¿Diputados conciencizados?

La tesis que manejan los simpatizantes de la derecha respecto de los dos diputados del FMLN que decidieron desoír la consigna de su partido —y respaldar a ARENA en la Asamblea Legislativa— es que se trata de individuos de “conciencia limpia”, preocupados por la situación económica de los salvadoreños. Sin embargo, por poco que se analice la trama de esta decisión, es claro que no se sostienen las explicaciones destinadas a justificar la conducta de los “desertores”. En primer lugar, el argumento según el cual los disidentes querían evitar un grave problema de falta de personal y medicamentos en los hospitales no es más que propaganda política. Precisamente, para evitar estos escenarios catastróficos, el legislador previó que, en caso en que al final de un ejercicio fiscal no se hubiera aprobado el Presupuesto del nuevo año, regiría automáticamente el presupuesto del año anterior.

La otra explicación que se esfuerza por mostrar que se trata de un gesto heroico de quienes se habrían sacrificado por el bien del país —sin importarle su partido— suena un tanto descabellado. Esta autoinmolación despierta más preguntas que respuestas. No

desentona con la práctica con que nos tienen acostumbrados los políticos salvadoreños del fin de la guerra; tampoco los presuntos sacrificados parecen estar tan a disgusto con la decisión tomada.

Por otro lado, la experiencia ha demostrado hasta ahora que quien se sale del FMLN para emprender nuevos proyectos políticos está condenado al fracaso. Antes lo intentaron dirigentes de mayor calado en el partido de izquierda, como Joaquín Villalobos y Fermán Cienfuegos. A estos les siguieron otras figuras de renombre como Roberto Roca y Héctor Silva. Todos fracasaron estrepitosamente por no convencer a los salvadoreños que representan una mejor opción que el FMLN. Además, a diferencia de lo que solía suceder en el pasado, los actuales disidentes no han asumido hasta ahora ningún protagonismo político. Al contrario, han dado la sensación de huir de los medios de comunicación, mostrando poca disposición de dar explicaciones respecto de sus actuaciones.

Ello no hace más que sugerir la desfachatez de quienes dijeron votar según su conciencia para hacer fracasar el plan de Handal. Este argumento no se sostiene, puesto que, a la luz de la experiencia, se puede vaticinar que tal decisión consagra su muerte política. Además, por otro lado, entre los dos diputados de marras está un suplente, cuya presencia en la Asamblea se debe a una mera casualidad, producto de la enfermedad de un diputado propietario. En este sentido, hay suficientes elementos para hablar de una confabulación de última hora, cuyo trasfondo desconocen los salvadoreños.

Se sabe, además, que cada uno de los partidos que secundaron a ARENA obtuvo réditos políticos tangibles. El PDC, CDU y PCN han logrado sobrevivir, como partidos políticos, gracias a su apoyo al proyecto de deuda de ARENA. De esta manera, pagaron el favor al partido oficial. Por lo que la pregunta que conviene hacerse es qué obtuvieron a cambio los disidentes del FMLN

por su voto a favor del plan de gastos de ARENA. Difícilmente se podrá saber a ciencia cierta cuáles fueron los términos de la negociación. Mientras no se encuentre una explicación plausible —ni datos que prueben lo que sucedió—, sigue en el ambiente el tema del soborno y compra de voluntades que alegan los simpatizantes del partido de izquierda.

### **Crisis en un partido y crisis de sistema**

Es precisamente en este contexto que conviene plantear el tema de la crisis del sistema político. No es del todo acertado decir que únicamente el FMLN se encuentra en crisis, como lo mencionan los dirigentes de la derecha. A estas alturas, no cabe duda de que la estrategia política de la dirección del FMLN ha sido un rotundo fracaso. Las elecciones internas no han cerrado la brecha entre ortodoxos y renovadores. Buena parte de la explicación de la disidencia en el FMLN se encuentra en este hecho. Mientras se sigan ignorando las voces que reclaman una nueva relación con la derecha, seguirá abierto el camino para esta clase de decisiones turbias.

Por otro lado, la alianza de última hora entre los dos diputados efemelenistas y la derecha, más que señal de la libertad de conciencia de la que se habla, refleja un problema mayor de la vida política. ¿Por qué en ningún momento el presidente Antonio Saca intentó negociar con los dirigentes del FMLN? ¿Qué pasará si en las próximas elecciones para diputados los electores salvadoreños siguen otorgando a la oposición la clave de la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa? ¿Con cuántos diputados opositores —del FMLN o de otros partidos— el gobierno de ARENA estará dispuesto a hacer negocios oscuros? Es evidente que, en las reacciones a lo sucedido con Nicolás García y José Portillo, no se han incluido estos temas.

La llave que ARENA otorgó para la supervivencia del PDC, PCN y CDU debilita el Estado de derecho. En virtud de la ley electoral, estas organizaciones debieron haber

desaparecido. Sin embargo, para evitar una engorrosa negociación con el FMLN sobre los gastos estatales, ARENA y el presidente de la República decidieron violar las leyes y debilitar las instituciones básicas para el fortalecimiento de la democracia salvadoreña. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral apoyaron la iniciativa de ARENA y de Saca encaminada a salvar a los partidos que no alcanzaron suficiente votos para permanecer en la vida política.

Estos hechos son elementos que vienen a robustecer la acusación, esgrimida por el FMLN, de compra de voluntades por parte de ARENA. Esta estrategia sería doblemente ventajosa para el partido de derecha. Por otro, evita sentarse a una mesa con los dirigentes más intransigentes del FMLN. Por otro lado, puede seguir manejando el discurso de malestar general en el partido de izquierda. Si este discurso puede revelarse fructuoso en el corto plazo, se puede seguir ganando elecciones. Sin embargo, en el largo plazo, contribuirá a desacreditar aun más el sistema político.

ARENA muestra poco respeto a los salvadoreños que optaron por el partido de izquierda —casi el 30% de los electores— en los últimos comicios presidenciales. La estrategia de chantaje, compra de voluntades y negociaciones ilícitas con integrantes del FMLN, no es más que una señal reveladora de este desprecio. Pero, como saben aquellos que se han dado a la tarea de reflexionar sobre los elementos necesarios para fortalecer la institucionalidad democrática, ésta no rima con arrogancia, ni mucho menos con golpes bajos que vuelven impredecibles las reacciones de los adversarios. Los últimos acontecimientos políticos en la Asamblea Legislativa precipitan al país hacia un escenario de golpes bajos y de recriminaciones mutuas entre los dos partidos mayoritarios. Este hecho, como se puede prever, no hará más que reforzar la polarización entre ambos, impidiendo que lo que en verdad importa, la vida y las necesidades de la gente, pasen a segundo plano.



# Deuda externa: el eterno problema económico

Al revisar un poco la historia económica, se puede afirmar que desde el último cuarto de siglo la deuda externa se ha caracterizado por ocupar un papel fundamental en el marco político y económico internacional. Durante la década de los 70, el surgimiento de los petrodólares (definidos como excedente de liquidez en dólares de los países exportadores de petróleo), la recesión en EEUU y Europa y, hasta fines de 1979, las bajas tasas internacionales de interés, ofrecieron a los países económicamente subdesarrollados un marco idóneo para el acceso fácil a créditos abundantes y baratos. Los principales prestamistas, como la banca comercial privada, vieron en estos créditos una buena oportunidad de rentabilizar el capital, y considerar clientes privilegiados a los Estados, debido a que no podían declararse insolventes.

El uso que se le dio a este dinero varió en cada país, pero por lo general sirvió para dotar de armamento moderno a los ejércitos e impulsar empresas públicas. En aquellos lugares donde se realizaron grandes inversiones no se pudo frenar los impagos que a mediados de los 80 empezaron a hacerse insostenibles. Las tasas de interés subieron de forma drástica, como reacción a los problemas económicos por los que habían pasado los EEUU (una balanza comercial negativa y los grandes gastos en que incurrió para financiar la guerra de Vietnam). El resultado fue un endeudamiento progresivo de estos países, cuya señal de alarma fue la crisis de México en 1982.

Los siguientes años se denominaron la "década perdida", puesto que en ellos aún no se tomó conciencia de la grave-

dad del problema y se siguieron aplicando medidas con el fin de hacer sostenible la deuda. En realidad, la banca comercial ganó tiempo mientras asumieron el problema el Fondo Monetario Internacional (FMI), los Bancos de Desarrollo y otros organismos internacionales, pero la deuda empezó a manifestarse como un círculo vicioso que aún se mantiene, puesto que el pago de los intereses obliga a los países endeudados a obtener más y más préstamos.

En 1996, los países latinoamericanos, africanos y asiáticos endeudados debían más de dos billones de dólares a Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales, es decir, casi el doble que diez años antes. Actualmente, cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan estos países son exclusivamente en concepto de intereses por deuda.

El Salvador no escapó de este fenómeno. Desde el estallido de la guerra civil, el armamento utilizado para el ejército fue financiado con deuda, capital que pudo haberse invertido en otros sectores sociales. Desde los años 70, hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz, la deuda externa creció en casi 50%, y desde 1995 hasta el 2004, se incrementó en un 54.18%.

### ¿Empezando el año con pie derecho?

Durante el 2004 las cifras preliminares en materia fiscal que presentó el Banco Central de Reserva (BCR) no fueron muy alentadoras. La deuda externa había llegado a los niveles máximos establecidos por el FMI: 5,992 millones de dólares, el equivalente al 38.1% del PIB.

El BCR calculó además ciertos

indicadores que muestran la solvencia que tiene el país al adquirir obligaciones como deuda. Uno de éstos es la relación entre el saldo de la deuda y el Producto Interno Bruto (PIB). En dicha relación se calcula cuánto debe aportar la economía del país para pagar las obligaciones adquiridas. Según cifras preliminares del BCR, para el año 2004, este indicador fue de 30.10%, porcentaje que debe asignarse del PIB al pago de aquélla.

Estas cifras no parecen preocupar demasiado al gabinete económico del gobierno, pues en lo que va del año ya corre la noticia que el Ministerio de Hacienda tiene contemplado utilizar el endeudamiento para financiar las necesidades del Estado hasta que concluya el presente quinquenio.

Según las proyecciones de la cartera de Hacienda, para financiar los gastos corrientes e inversiones, del 2006 al 2009, se necesitará colocar un total de 1,213 millones de dólares en bonos (definidos como certificados emitidos a largo plazo por un gobierno con promesa de devolver a quien lo adquiere el dinero tomado a préstamo, más los intereses).

La Unidad de Análisis y Seguimiento Presupuestario de la Asamblea Legislativa (UASP) afirma que, con la aprobación del endeudamiento solicitado por el Ejecutivo para el año 2005, la deuda pública ascendería a los 7,375.8 millones de dólares, lo que equivale al 47% del PIB. Ello sobrepasa el nivel de endeudamiento requerido por los organismos internacionales para los países en desarrollo, los cuales, a raíz de la crisis en Argentina, decidieron establecerlo en 25% del PIB.

Un diagnóstico elaborado por los asesores técnicos de la UASP recomendó al Ministerio de Hacienda evaluar las medidas de austeridad impulsadas en los últi-

mos tres años, con el propósito de enmendar el endeudamiento. Sin embargo, también calculan un déficit en la partida de gastos de este año, que ascendería a los 933.3 millones de dólares.

Cabe mencionar que el incremento de la deuda no afecta solamente a la capacidad de pago del país, sino también a las inversiones pues, mientras el endeudamiento aumente, hará menos atractivo al país para los inversionistas extranjeros, provocando una disminución en el empleo.

Al realizar una comparación entre las políticas de endeudamiento establecidas en el Presupuesto General de la Nación con la solicitud de emisión de bonos por el Ministerio de Hacienda, la cual ya fue aprobada, se puede afirmar que dichas medidas contradicen los objetivos en materia de política fiscal para el presente año, en el sentido de "darle un manejo responsable y prudente de los niveles de endeudamiento, los cuales deberán tener coherencia con la capacidad de pago del país, conservando su calificación y credibilidad internacional."

También es incoherente con la política de gastos planteada para el sector público, en donde se establecen medidas como: "aplicar una política de ahorro del sector, mantener el gasto público congruente con los niveles de ingresos y en función del cumplimiento de objetivos y metas nacionales".

Por otro lado, la tardanza en la aprobación del presupuesto ha llevado a la Asamblea ha proponer otra medida emergente que permitirá al Estado sobrellevar la carga corriente. Esta corresponde a 985 millones de dólares en Letras del Tesoro (LETES). Es importante explicar que la deuda al emitir LETES es a corto plazo, es decir pagadera a 30, 60, 180 o 365 días como máximo; por eso mismo, supo-

nen más presión para pagarla que si se emitieran bonos.

Esta posibilidad existe debido que, al no poder cumplir con sus obligaciones de gastos, el gobierno emite LETES para que sean compradas por inversionistas locales y se use ese dinero para el presupuesto.

Según el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, las LETES permitirán pagar los salarios de los empleados públicos y contratar algunas plazas, como las de Hacienda para llevar adelante la reforma fiscal. "No es una solución, pero había que ser responsable con los pensionados. De lo contrario, tendríamos que la cantidad de 351 millones de dólares no llegarán a los pensionados en 2005", afirmó el funcionario.

Carlos Acevedo, economista del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), opinó que la emisión de LETES es "de los males, el menor". Agrega que esta era la única salida que tenía el gobierno para financiar sus gastos: "tiene que endeudarse, a no ser que la carga tributaria aumente, y ésa no es una salida a corto plazo. Técnicamente, las LETES son deuda, y hubiera requerido también la aprobación de los dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero el Gobierno no lo considera deuda. Ellos creen que la deuda es [únicamente el] préstamo internacional", sostuvo el economista.

Mauricio Choussy, vicepresidente de FUSADES, enfatizó en que no se debe olvidar que para el presupuesto de 2006 habrá que incluir la cancelación de esas LETES y ya se trae un remanente de otras, por lo que el monto total de la deuda será más elevado: "financiar déficit fiscal con LETES no es la mejor alternativa para un país, pues está desperdiciando obtener recursos de más largo plazo y a menores tasas de interés a través de

bonos", enfatizó.

Por otro lado, las reacciones del partido de izquierda no se hicieron esperar. El partido de oposición se rehusa a que el presupuesto sea financiado con mayor endeudamiento cuando no sea para inversión pública, como es bajo el esquema planteado anteriormente.

El FMLN elaboró una propuesta en donde destaca una serie de medidas, algunas basadas en estudios del PNUD. Según el partido de izquierda, se debe consensuar una política de endeudamiento público en función del desarrollo humano, es decir, realizar la reforma fiscal para el desarrollo humano sugerida por el PNUD que incluya la renegociación y reestructuración de la deuda, lo cual, sugiere la cancelación de parte o del total de la deuda a cambio del compromiso del gobierno deudor de movilizar recursos nacionales para proyectos de conservación.

Las reformas expuestas por el PNUD no están muy lejanas a la realidad. Sin embargo, es importante reconocer que, así como toda propuesta, tiene sus beneficios y limitantes. En cuanto a los primeros, se pueden mencionar que la contribución limitada a la reducción de la deuda externa permite inyectar recursos en actividades de desarrollo, además de fortalecer la cooperación norte-sur en torno a objetivos compartidos. Y entre sus limitantes se destaca que es un proceso complicado, genera problemas de inflación, existen barreras institucionales y podría darse la falta de transparencia en los flujos de capital.

Pero mientras los partidos se mantienen en una disputa política sin sentido, poco se puede hacer, tanto para tomar una decisión en cuanto al financiamiento del presupuesto, como para evitar que se incremente el endeudamiento del país.



## Relanzando el Plan de Nación

Hace justo siete años, en 1998, la Comisión Nacional de Desarrollo presentó al entonces presidente de la República, Armando Calderón Sol, y al país entero, el documento *Bases para un plan de nación*. Era la primera vez, desde los Acuerdos de Paz, que un grupo de salvadoreños notables se sentaba para discutir el estado y el rumbo de la nación. Meses después, luego de intensas jornadas de consulta en todo el territorio nacional —y coincidiendo con el preludio del ascenso de Francisco Flores al Ejecutivo—, la Comisión rubricaría *Temas claves para el Plan de Nación*, un compendio de los principales retos de El Salvador de cara a los próximos años. El documento suscitó un ambiente de debate nacional, pero pronto fue ahogado desde la misma casa de gobierno: Francisco Flores, una vez investido, ignoró el esfuerzo propiciado por su antecesor. Pero Elías Antonio Saca parece haber aprendido la lección: hace unos días, honrando una promesa electoral, apoyó el relanzamiento del Plan de Nación. La noticia es alentadora. Sin embargo, a juzgar por la limitada atención que Casa Presidencial le ha prestado al asunto y por las actuales prioridades del Ejecutivo, pareciera que la vuelta al Plan obedece más a la insistencia de sus gestores —miembros de la sociedad civil— que a una voluntad expresa del presidente y su equipo de gobierno.

En efecto, cuestiones como la aprobación del presupuesto general del Estado para 2005, los cabildeos nacionales e internacionales en vistas del TLC con EEUU, las reformas tributarias y el plan súpermano dura son prioridad de la actual administración. A ello se debe, en parte, que el anuncio de la vuelta al Plan de Nación apenas tuviera eco entre los círculos oficiales, como sí lo ha tenido entre algunos sectores de la sociedad civil, que insistentemente han demandado del Ejecutivo una visión de país en los proyectos de desarrollo.

Y es que uno de los mayores méritos del trabajo de la Comisión ha sido el énfasis en el desarrollo territorial —especialmente las

zonas del país con gran potencial económico que han sido rezagadas durante años— y la integración de todo el país. No es de extrañar que los inicios de la Comisión coincidiera con la emergencia de los discursos —defendidos por municipalidades y asociaciones comunales— que enfatizaban el desarrollo local. Así, la Comisión Nacional de Desarrollo se llevó las palmas en su innovador intento, pero también fue sometida a la crítica debido a la generalidad de algunos de sus postulados y conclusiones.

Saca y su equipo tienen suficientes asuntos de qué ocuparse en la actualidad. La trascendencia de esos tópicos —en la búsqueda del bien de las mayorías— es lo de menos. Basta con que acarreen el suficiente respaldo popular, de lo cual no hay duda. En otras palabras, pese a ser el Plan de Nación un proyecto de primera importancia en la agenda de un país en desarrollo como El Salvador, su relanzamiento —como lo fue su primera aparición en el escenario nacional— no acumula la suficiente sinergia por parte de los círculos gubernamentales como para ser asimilado por la sociedad en su conjunto. Un plan de nación no sería tal si no involucrara a esta última, extendiéndose por todo su tejido. Ni el gobierno ni la sociedad han asumido el papel que les corresponde en la construcción de un verdadero plan de desarrollo nacional pensado a largo plazo.

Algunos sectores de la sociedad civil —como la Comisión misma— sí han asumido un rol activo en esta tarea, pero su esfuerzo se torna poco útil si no se involucran todas las fuerzas de la sociedad, incluyendo a los partidos políticos, empresarios, sociedad civil organizada y al Estado mismo. En ese sentido, el país ha hecho muy poco en estos siete años: basta con reseñar los escasos niveles de entendimiento entre los sectores arriba mencionados.

### Siete años y tres administraciones

La irrupción del Plan de Nación coincidió con los últimos meses del gobierno de

Calderón Sol. Al término de éste, se escribía desde el editorial de *ECA*: "El Salvador perdió cinco años que pudieron haber sido aprovechados para fortalecer la institucionalidad, estimular la producción —creando empleo y elevando el ingreso familiar— y reconstruir las relaciones sociales. El año preelectoral, en lugar de ser un obstáculo, debiera ser un tiempo para reflexionar sobre los errores cometidos, buscando la manera mejor para corregirlos, y para establecer las prioridades de la sociedad. Un país con los problemas de El Salvador —proseguía el editorialista— no puede permitirse seguir perdiendo el tiempo y recursos en empresas o aventuras que lo distraen de sus desafíos reales y más urgentes".

El ejercicio de las *Bases para un plan de nación* —se lee en el editorial— "es una oportunidad para formular una propuesta de desarrollo concertada y viable, cuyos frutos podrían verse en el corto y mediano plazo". Pero la historia es de todos conocida. La llegada de Flores a Casa Presidencial marcó el inicio de otra larga postergación de una agenda concertada de reconstrucción. Su gestión tampoco fue bendecida por la naturaleza: el ahora candidato para dirigir la OEA tuvo que enfrentar las secuelas de la tormenta tropical Mitch, sucesivas sequías y de dos terremotos en 2001 —pretextos utilizados por los titulares de gobierno para justificar los magros resultados económicos acumulados desde la administración de Calderón Sol—.

Como quiera que sea, Flores dejó el despacho presidencial rodeado de un halo de confrontación pocas veces vistos desde la firma de la paz. El reto de Antonio Saca incluía sacar al país de ese sombrío escenario, lo cual logró momentáneamente hasta que la testarudez de un FMLN y una nueva recaída autoritaria del partido oficial y el aparato estatal que controla reclamaron nuevamente su lugar tras años de enquistamiento. En ese panorama, Saca retoma el Plan de Nación, si bien gozando de importantes niveles de aceptación entre los salvadoreños, pero subestimando a quienes deberían ser sus más cercanos

interlocutores en el diálogo que presupone dicho Plan: sociedad civil, partidos políticos —el FMLN aunque lo desconozca—, municipalidades y empresarios. Estos últimos no pueden quejarse de desatención por parte del presidente. Cada vez que éste ha tomado decisiones que afectan el país no ha dudado en consultarlas con los grandes empresarios, sus aliados naturales.

En definitiva, la asimilación de un verdadero Plan de Nación, al margen de la escasa propaganda gubernamental o particular del mismo, requiere algunas condiciones objetivas y subjetivas que, en la actualidad, escasean en El Salvador. Por el lado de los factores objetivos, el país echa de menos cierta capacidad administrativa necesaria para impulsar un salto cualitativo en cuanto a desarrollo se refiere; también adolece de ciertas debilidades estructurales en su entramado institucional, al tiempo que escasean los recursos financieros, por mencionar lo imprescindible. Desde el punto de vista de las condiciones subjetivas, los salvadoreños no han alcanzado la cuota necesaria de cultura política para asumir los retos de la descentralización, participación política, rendición de cuentas y control ciudadano, por ejemplo. Tampoco parece haber suficiente voluntad política entre quienes conducen los destinos del país para impulsar los cambios necesarios.

Un Plan de Nación no sólo presupone recursos y obras de infraestructura —por más que el Ejecutivo anuncie pomposamente el rescate del Puerto de la Unión y la captación de recursos quién sabe de dónde—, sino un cambio de actitud que los salvadoreños no muestran en la actualidad. Presupone, además, un clima propicio para el diálogo y el entendimiento, que también se echa de menos. Un nuevo retroceso del Plan sería otra oportunidad perdida para El Salvador y señalaría, entre otras cosas, que el Ejecutivo simplemente utilizó el trabajo de una Comisión para sus intereses políticos. De todos modos, debe valorarse el ánimo y compromiso democrático de los miembros de la Comisión.

## Tragedia en el Océano Índico

El mundo occidental se preparaba para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo cuando un terremoto sacudió las profundidades del Océano Índico, frente a las costas de Sumatra, Sri Lanka e Indonesia. El posterior maremoto desencadenado por el movimiento telúrico se llevó a las personas, casas, embarcaciones y vehículos que encontró a su paso; curiosamente los animales, por un prodigioso sexto sentido, huyeron de la tragedia. Las imágenes de la prensa y televisión son dantescas. El tsunami, como se le conoce en el Pacífico, azotó simultáneamente las costas de ocho países asiáticos y cinco naciones africanas. Además de los cerca de 225,000 muertos reconocidos hasta el 19 de enero, el fenómeno lesionó a unas 500,000 personas y desplazó a otros cinco millones, de acuerdo al periódico francés *Libération*.

La asistencia internacional no tardaría en llegar. El portavoz del secretario general de la ONU declaró el mismo día de la catástrofe que “los equipos de las Naciones Unidas de evaluación y coordinación en casos de desastre se están dirigiendo a toda la región para colaborar con los gobiernos de los países afectados en la prestación de asistencia para las actividades de rescate y socorro”. Iniciado el 2005, los líderes mundiales de más de 20 países reunidos en Yakarta, capital de Indonesia, acordaron otorgar un alivio a la deuda de los países perjudicados por el desastre y apoyaron la creación de un sistema de alerta en la región. Según el informativo alemán *Deutsche Welle*, “los gobiernos del mundo han prometido hasta el momento 4.000 millones de dólares en ayuda, mientras que grupos privados e individuos han anunciado donaciones de otros 630 millones. Además —prosigue la fuente—, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia se expresaron a favor de que se suspendan

los pagos de la deuda de las naciones afectadas por el desastre”.

La misma fuente periodística recoge algunas impresiones de los asistentes a la cumbre de Yakarta. Lakshman Kadirgamar, ministro de Relaciones Exteriores de uno de los países más afectados, Sri Lanka, destacó la solidaridad internacional, pero dijo que lo primero que debía hacerse era encarar el trauma de los sobrevivientes, e insistió en que había que buscar sistemas de prevención y coordinación de desastres. Para su homólogo tailandés, Surakiart Sathirathai, “diez minutos de alerta pueden salvar muchas vidas”, destacando que muchas muertes podrían haberse evitado de haber existido un sistema de alerta: “tenemos que hacer lo posible para evitar una catástrofe semejante en el futuro”, acotó el jefe de la diplomacia tailandesa.

Pese a que a la cita acudieron representantes de naciones y organismos poderosos —el todavía secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, el presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, y el premier chino, Wen Jiabao—, la ayuda prometida es insuficiente frente a la magnitud del desastre. El director del periódico francés *Le Monde Diplomatique*, Ignacio Ramonet, desde la página electrónica *Rebelión*, escribe que la ayuda pública y privada para las víctimas “es insignificante comparada con otros gastos. Por ejemplo, solo el presupuesto militar de Estados Unidos representa, anualmente, 400,000 millones de dólares... Otro ejemplo, cuando en el otoño de 2004 Florida se vio afectada por ciclones que provocaron severos destrozos pero incomparables con el actual desastre del Océano Índico, Washington desbloqueó inmediatamente una ayuda de tres mil millones de dólares... De cualquier forma, las su-

mas prometidas son ridículas frente a las necesidades de los Estados lacerados por el tsunami", precisó.

Otros datos que impresionan: la deuda exterior pública de cinco de los países afectados se eleva a más de 300,000 millones de dólares, según el Banco Mundial; además, esas naciones pagan anualmente unos 23,000 millones de dólares en concepto de deuda. Sólo el importe del presupuesto "suplementario" que el presidente George W. Bush pidió a su Congreso para financiar la guerra de Irak y Afganistán asciende a casi 100,000 millones de dólares, un poco más de lo que el PNUD calcula que se necesita para garantizar, en todo el mundo, los servicios de agua potable, techo, alimentación, educación primaria y salud básica.

Ramonet califica como "emoción mundial" el estupor que el maremoto causó entre las naciones del mundo. Igualmente conmocionado, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que "lo sucedido el 26 de diciembre de 2004 fue una catástrofe mundial sin precedentes. Por tanto, exige una respuesta mundial sin precedentes." Más allá de las cifras y de la conmoción planetaria, la tragedia pone al descubierto lo que pocos se atreven a decir, aunque acepten a regañadientes: la vulnerabilidad de las naciones afectadas y su poca trascendencia en el concierto mundial liderado por las naciones más poderosas del planeta. También constituye un llamado de alerta para países como El Salvador, cuyo territorio y sociedad son igualmente vulnerables.

La gran "emoción mundial", desarrollando la idea de Ramonet, aflora de vez en cuando entre la humanidad. La última vez, las noticias provenían de Madrid: el día 11 de marzo de 2004, un atentado terrorista, luego atribuido a grupos radicales, cobró la vida de casi 200 personas y dejó unos 1,400 heridos. El impacto mediático fue tal que dio un inusitado viraje a los resultados de los comicios que se celebrarían días después en España. El "11-M", como le bautizaron los medios, trajo a memoria la más grande con-

moción planetaria ocurrida en los albores del siglo XXI: los atentados terroristas del 11 de septiembre en EEUU. Entonces la emoción se propagó desde el corazón del poder militar y económico del mundo. 11-S y 11-M coinciden no sólo por el día, sino también por el impacto mediático que causaron en occidente y en todo el mundo.

Lo del 26 de diciembre —que seguramente no será titulado "26-D"— no cobra relevancia únicamente por la magnitud del golpe para los habitantes de las naciones afectadas: cerca de diez mil ciudadanos de otros 45 países del mundo murieron o desaparecieron. Entre ellos se cuentan unos dos mil suecos, mil alemanes, setecientos italianos, quinientos austriacos, doscientos franceses, doscientos neozelandeses, así como algunos ciudadanos de países del Tercer Mundo como México, Colombia, Brasil y Filipinas.

En otras palabras, la catástrofe se llevó de encuentro también a occidente y su modo de vida, lo cual, sin lugar a dudas, extendió las proporciones de la tragedia. Si no fuera de ese modo —concluye Ramonet en su artículo—, entonces afloraría esa emoción mundial ante el hecho de que anualmente mueran miles de seres humanos (sobre todo niños) en India, Maldivas, Sri Lanka, Bangladesh, Birmania, Tailandia, Malasia e Indonesia porque no tienen agua potable, beben agua contaminada o por las incontables inundaciones.

"¿Y si ocurriera un tsunami en El Salvador?" —se preguntan los periodistas de la revista *Vértice* de *El Diario de Hoy*—. Ni siquiera las instituciones oficiales como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) o el Comité de Emergencia Nacional (COEN) tienen cálculos aproximados de la población vulnerable o del posible impacto que causaría un fenómeno similar en la costa salvadoreña. No está de más recordar que el país es quizás igualmente vulnerable que las naciones afectadas por el tsunami. El huracán Mitch y los terremotos de 2001 son muestra de esa vulnerabilidad.

## Los derechos humanos en el 2004 (IV)

Para realizar un balance completo sobre la vigencia y protección de los derechos humanos, esta vez hemos decidido incluir, además del desenvolvimiento de las principales instituciones que velan por respeto de los mismos, la mención de algunas problemáticas específicas que requieren especial atención, así como algunos logros importantes en la defensa de los derechos humanos, suscitados desde la participación de organizaciones sociales, dentro o fuera de El Salvador.

### Derechos humanos de las mujeres

Por años, la expresión cultural machista ha propiciado en nuestro país evidentes muestras de discriminación y violencia en perjuicio de las mujeres. En la actualidad, la población femenina salvadoreña es mayoritaria respecto de los hombres. Pese a lo anterior, se sigue contabilizando un alza en los ataques violentos contra ellas.

Por ejemplo, entre 1999 y 2002, la cifra de homicidios cuyas víctimas eran mujeres no excedió de 200, pero ya para finalizar el 2004, las autoridades habían contabilizado, al menos, 228 asesinatos contra personas del sexo femenino.

No es casual pues, que en febrero pasado, hayamos tenido la visita oficial de la Relatora Especial de la ONU para la Violencia contra la Mujer, Yakin Erturk, quien manifestó en un informe preliminar (ECN.4-2004-66-Add.2, 8 de marzo 2004) que a pesar de que El Salvador ha realizado enormes esfuerzos en la modificación de su marco legal "la violencia contra la mujer sigue sin considerarse un delito grave. Hay un elevado grado de impunidad que refuerza los modelos de desigualdad y discriminación y perpetúa la violencia (...). Según muchos testimonios, el sistema de justicia penal simplemente vuelve a convertir a las mujeres en víctimas. (...) En términos generales, la

respuesta de las autoridades no ha sido adecuada, ya que no ha procedido a una investigación efectiva, al enjuiciamiento ni al castigo de los responsables. No se ha indemnizado a los supervivientes ni se ha proporcionado un apoyo integrado a las familias de las víctimas".

Estas palabras contundentes de la relatora nos indican el estado de las cosas. Un ejemplo de lo antes señalado es la impunidad con que finalizó el caso del abogado Nelson García, en el que tecnicismos legales y un mal procedimiento policial, redundaron en la negación de justicia para varias mujeres que lo habían denunciado por abusos de índole sexual.

De igual forma, las noticias diarias dan cuenta de muchas asesinadas, la mayoría de veces, como evidente consecuencia de la violencia de género. Son comunes las muertes de mujeres a manos de sus propios esposos o compañeros de vida, o simplemente por el solo hecho de rechazar un "piropo" en la calle.

Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó en marzo el informe titulado *"Cuadernos sobre desarrollo humano: Género"*, en el que se afirma que la participación de las mujeres en puestos claves de poder ha sido muy limitada en el período 2003-2006 —período de funciones de la actual legislatura y de los gobiernos municipales—, ya que sólo dos mujeres por cada diez hombres ocupan estos cargos.

En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, sólo se cuenta con una representación femenina del 10.7%, mientras que, en las alcaldías, la misma es del 6.5% y en la Corte Suprema de Justicia es del 13%.

### Derechos humanos de la niñez

Otra preocupación constante en El Salvador es la victimización de su niñez, sector



que representa al 42.35% de la población. El abuso sexual, la violencia en las calles, la brutalidad dentro del hogar, niñez desaparecida, jóvenes en conflicto con la ley, entre otros, siguen siendo temas que constituyen problemas no resueltos, que nos ubican como un país fuertemente cuestionado en el ámbito internacional.

En el 2004, una comisión del gobierno viajó a Ginebra, para rendir un informe acerca de la situación de la niñez ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Luego de la argumentación gubernamental, el Comité llegó a conclusiones contundentes: en primer lugar, exhortó a las autoridades salvadoreñas a derogar la "Ley Antimaras", cuestionó seriamente la capacidad rectora de la Secretaría de la Familia y del Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, en materia de protección de la niñez, a la vez que recomendó al Estado adquirir un rol protagónico para la creación de la "Comisión Nacional de Búsqueda" de la niñez desaparecida durante el conflicto armado.

Por otra parte, el referido Comité señaló que "es motivo de profunda preocupación el número desproporcionado de niños víctimas de delitos, actos de violencia u homicidios". Alrededor de este último punto, resulta altamente preocupante e indignante que ocurran casos como el de Maycol Ticas, ya comentado en ocasiones anteriores, así como otros que reflejan los constantes abusos sexuales en perjuicio de niños y niñas en muchos hogares, en albergues bajo custodia oficial, en iglesias y escuelas, pero más preocupante es aún la falta de sensibilidad y firmeza de los operadores del sistema de justicia que, a la larga, vuelven a convertir en víctimas a estos infantes o permiten que los hechos criminales queden en la impunidad.

Vale la pena mencionar en este apartado a la Procuraduría General de la República, la cual ha logrado avances importantes en la tutela del derecho de alimentos de la niñez, ya que a través de esta institución se ha podido obligar a muchos padres irres-

pensables para que proporcionen una cuota alimenticia a sus menores hijos e hijas. Sin embargo, cuestionamos nuevamente el hecho que el principal asesor del Procurador General de la República sea parte del equipo de abogados estatales que defienden la desaparición forzada de niños y niñas ocurridas durante la guerra, ante instancias internacionales en las que El Salvador se encuentra siendo juzgado.

## **Derechos humanos de personas de la tercera edad**

Aunque enero sea un mes dedicado para rendir homenaje a los adultos mayores y que ello genere que el gobierno les "alegre el rato" a través de fiestas y festivales, lo cierto es que este grupo sufrió uno de los peores reveses durante el año 2004. En junio, por iniciativa del Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Pensiones, en el sentido de eliminar uno de los accesos a la pensión por retiro. Antes de la reforma, las personas podían jubilarse al cumplir uno de dos requisitos: sesenta años de edad o treinta años de trabajo.

Con la reforma, deben cumplirse los dos requisitos para jubilarse, prorrogándose entonces la posibilidad del acceso al derecho social básico de una pensión digna. Con esta medida se afectó a muchos; por ejemplo, para el 2005, alrededor de 3,784 personas que antes de la reforma tenían opción para retirarse, ya no podrán hacerlo; en el 2006 se verán afectadas unas 8,333 personas y así de manera sucesiva esta lista se va a ir incrementando. Frente a estos hechos, lo que más llamó la atención es que el gobierno actual se jacta de tener "sentido humano", pero en esta oportunidad señalaron, que pese a afectar a miles de personas, la reforma resulta beneficiosa, pues les permite "el ahorro de más de cien millones de dólares en los próximos cinco años". Dicho de otra forma, para las autoridades fue más importante velar por "Don Dinero", que favorecer la humanidad o dignidad de los numerosos afectados.

## Algunos logros importantes

Como último apartado de este balance resumido, debemos mencionar algunos logros importantes en el 2004 que merecen especial atención. Así, a escala mundial se han despertado muchas expectativas a raíz del desafuero penal que se resolvió en contra del ex dictador chileno general Augusto Pinochet Ugarte. A consecuencia de ello, se avecina un juicio en el que se determinará la participación de Pinochet en crímenes de diversa naturaleza.

Este importante paso en la reivindicación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Chile, nos dan la luz para pensar que la justicia es todavía posible para muchos episodios de sangre ocurridos en América Latina y El Salvador, a pesar que han transcurrido muchos años desde que ocurrieron y que durante décadas han enfrentado verdaderos muros de impunidad.

En esa misma línea, el año pasado será recordado porque El Salvador fue sentado —por primera vez— en el banquillo de los imputados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acusado de violar derechos fundamentales, al haber propiciado la desaparición forzada de dos niñas durante la guerra civil. La denuncia fue presentada por la Asociación “Pro Búsqueda”, organismo no gubernamental que trata de averiguar el paradero de niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado que vivió nuestro país.

Los representantes del Estado intentaron por todos los medios evitar el juzgamiento, aduciendo la incompetencia de la Corte sobre varios aspectos. Al final, el referido tribunal aceptó conocer sobre la vulneración de El Salvador de los derechos de Protección Judicial y Garantías Judiciales de los familiares de las víctimas. Para el 2005 se espera el fallo definitivo.

Finalmente, existieron dos acontecimientos inéditos en la historia de los derechos humanos en El Salvador, que nos llenan de

mucha satisfacción. En primer lugar, en el ámbito académico, una delegación de estudiantes de derecho de la UCA, dirigida y apoyada por el IDHUCA, se agenció el primer lugar en la VII Competencia Interamericana de Derechos Humanos “Eduardo Jiménez de Aréchaga”, efectuada en noviembre en San José, Costa Rica. Lo anterior es un galardón sin precedentes en la historia universitaria del país, dado que con mucho esfuerzo y estudio se logró superar a otros contendientes provenientes de todo el continente americano y se puso muy en alto el nombre de nuestro país y, sobre todo, se puso de manifiesto la importancia que desde la UCA se le da a la formación de sus estudiantes en el área de derechos humanos.

Por otra parte, debe resaltarse como un honor muy grande, que el IDHUCA fue galardonado con el “Premio de los derechos humanos de la República Francesa 2004”. La mencionada condecoración tuvo lugar debido al trabajo que se realiza desde el Instituto, tanto a través de las defensorías de derechos humanos de la niñez y adolescencia, como por los cursos de formación en derechos humanos para funcionarios y agentes estatales.

El premio otorgado, que es de carácter mundial, representa para el IDHUCA y para los defensores de derechos humanos en general, un verdadero reconocimiento a la valentía y decisión de todas las víctimas de abusos y atropellos, del pasado y del presente, que han emprendido la lucha por reivindicar sus derechos y que no piensan quedarse de brazos cruzados ante la injusticia. Viene a ser además un empuje, para que todas las personas que creemos en la verdad y la justicia sigamos tratando de hacer posible el pleno e irrestricto goce de los derechos humanos, sin distinciones.

Como vemos, el 2004 fue un año de contrastes en materia de derechos humanos, pero queda claro que fueron más los retos que quedaron pendientes que los logros realmente alcanzados.